

Curicó, doce de diciembre de dos mil veintidós.

**VISTO, OÍDO Y CONSIDERANDO:**

1º) ***Demanda.*** Con fecha 14 de septiembre de 2022, comparece don **EDUARDO JOSE GUILLERMO BUSTAMANTE ULLOA**, chileno, Ingeniero en Informática Empresarial, soltero, cédula de identidad N° 17.496.524-2, domiciliado en Cinco 1/2 Poniente, N° 285, comuna de Talca, y deduce **demanda de declaración de relación laboral, despido indirecto, nulidad del despido y cobro de prestaciones**, en contra de su ex empleadora, la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RAUCO**, RUT 69.100.400- 7, representada por don **ENRIQUE OLIVARES FARIAS**, ambos domiciliados en Avenida Balmaceda N° 35, comuna de Rauco, de conformidad a los fundamentos que en síntesis se indican a continuación.

Menciona que comenzó a prestar servicios bajo subordinación y dependencia en favor de la demandada a partir del 1 de enero de 2017 y hasta su autodespido ocurrido el 9 de septiembre del año 2022. Refiere que en todo ese tiempo cumplió la función de Asesor de Informática y Transparencia, así como la de Apoyo en el Área Jurídica, en la Oficina de Informática, dependiente de la Municipalidad, mediante múltiples contratos de honorarios, pero que en realidad eran contratos de trabajo. Añade que desempeñó el cargo de forma estable y permanente, el que era indispensable en la organización jerárquica de la Municipalidad. Asimismo, indica que estaba sujeto a jornadas de trabajo claramente establecidas, con el deber de obediencia en el desempeño de sus funciones, sin reclamos, ni amonestaciones de ninguna especie y con un constante aumento de sus funciones.

Sostiene que los regímenes estatutarios no le fueron aplicables, pues nunca fue contratado como funcionario en ninguna de las categorías de la Ley 18.883 y siendo persona natural tampoco estuvo sometido a un estatuto especial de aquellos que aplican en la Institución. Describe que se le contrató bajo la norma del artículo 4 de dicha ley, sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos



de educación superior o expertos en determinadas materias, pero las labores prestadas jamás fueron accidentales, no habituales, ni se pueden catalogar de específicos, siendo aplicable en la especie el Derecho Laboral y el Código del Trabajo, pues se está ante una relación laboral propia de un contrato de trabajo.

Explica que el 9 de septiembre del año 2022, presentó carta de autodespido con copia a la Inspección del Trabajo, por el no pago de las cotizaciones previsionales durante todo el periodo trabajado. Detalla las labores realizadas como Asesor de Informática y Transparencia, así como Apoyo en el Área Jurídica, en la Oficina de Informática, de la Municipalidad, a contar del 1 de enero de 2017 hasta el 9 de septiembre del año 2022, cargos habituales de la institución, durante 5 años y 8 meses, de forma constante, sujeto a una jornada de trabajo. Adiciona que fue objeto de instrucciones por parte de su empleador directo, encontrándose con la observancia de éste, tanto al inicio como al término del turno de trabajo, y ejecutando en la práctica una serie de labores que se originaron en el poder de mando de su empleador, las cuales no son susceptibles de caracterizarlas como simples lineamientos, puesto que justamente en la práctica dichas órdenes constituyen un claro ejemplo de existir un vínculo de subordinación y dependencia, siendo estas claras, precisas y ejercidas sin posibilidad alguna de poder negarse. Se cumplió con una jornada mínima de 44 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes, en las dependencias de la institución, de forma regular y continua.

Aclara que si bien en la práctica se emitieron boletas electrónicas de honorarios a nombre de la Municipalidad, el pago lo recibió directamente del departamento de remuneraciones de la institución, por montos similares y de forma mensual durante toda la vigencia de la relación laboral, adoptando en la cotidianeidad la forma de una remuneración encubierta en un pseudo y peculiar “honorario”, el cual se pagaba previa confección, visación y aprobación de un Informe Mensual de Gestión. Así detalla que su remuneración alcanzaba el monto de \$777.778 y que se le adeuda la del mes de agosto y la de 8 días de septiembre del presente año. Asimismo, hace presente que el empleador jamás efectuó el pago de las cotizaciones previsionales correspondientes.



Previas citas legales, solicita que se acoja la demanda y se declare la existencia de una relación laboral entre las partes, el despido indirecto, la nulidad del despido y que se le adeudan las prestaciones que se indicarán, realizando las siguientes peticiones concretas:

1. Se declare la procedencia del despido indirecto.
2. Se declare que entre la demandada y el actor existió una relación laboral entre el día 1 de enero de 2017 y hasta el 9 de septiembre de 2022.
3. Se declare la continuidad de los servicios prestados desde el día 1 de enero de 2017 y el día 9 de septiembre del año 2022.
4. Indemnizaciones:
  - Sustitutiva de aviso previo por \$ 777.778.
  - Indemnización por años de servicio, por \$4.666.668.
  - Recargo del 50% del total del aviso previo y de la indemnización por años de servicio, por \$2.722.223.
5. Remuneración correspondiente al mes de agosto y 8 días del mes de septiembre, ambos del año 2022, ascendente a \$985.186.
6. Feriado legal por \$2.722.230 equivalente a 105 días.
7. Feriado proporcional por \$362.964 equivalente a 14 días.
8. Cotizaciones impagas.
9. Remuneraciones y demás prestaciones que se devenguen como consecuencia de la nulidad del despido.
10. Reajustes, intereses y costas.

**2º) Contestación:** Con fecha 19 de octubre de 2022 comparece la abogada doña **KARINA REBECA SEPÚLVEDA FLORES**, en representación de la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RAUCO**, persona jurídica de derecho público, representada por su Alcalde don **ENRIQUE OLIVARES FARÍAS**, funcionario



público, ambos con domicilio en Avenida Balmaceda N ° 35, comuna de Rauco; y **contesta la demanda** solicitando su rechazo, con costas.

Aclara que el actor, inició la relación contractual con la corporación municipal, en el marco de una compra de servicios regulada por la Ley 19.886 sobre contrato de prestación de servicios y suministros, y su reglamento contenido en el DS 250 del Ministerio de Hacienda que fija el reglamento de la citada Ley de Compras Públicas, que dio origen a la respectiva orden de compra, y reguló mediante bases y términos técnicos de referencia publicados en portal de mercado público. Así, hubo una mera relación comercial entre el Sr. Bustamante y el municipio desde el 1 de enero de 2017 al 30 de noviembre de 2017, siendo el servicio adquirido el de “apoyo informático en redes, programación, sitio web y plataformas”.

Posteriormente sus servicios fueron contratados en el marco del artículo 4 de la Ley 18.883, a fin de cumplir **funciones accidentales** que el Concejo Municipal de Rauco aprobó para su ejecución durante el ejercicio presupuestario siguiente, consistentes durante los años 2017 y 2018 “Asesoría Informática y Transparencia para Unidad de Transparencia Municipal”; años 2019, 2020, 2021 “servicio de asesor Ley de Transparencia y Apoyo Informático en Plataformas que Indica”; y año 2022, “Asesoría Informática y Transparencia”. El actor fue contratado desde 01.01.2018 para ejecutar los citados encargos, manteniendo dicha relación civil vigente hasta el término anticipado de su contrato.

**Opone excepción de incompetencia absoluta del tribunal** toda vez que la modalidad de contratación utilizada por la Municipalidad de Rauco para el Sr. Bustamante, fue una “A HONORARIO”, sometiéndose a las disposiciones contenidas en el contrato a honorarios. Por ello, solicita que el Tribunal se declare incompetente para conocer de la demanda y que ordene al demandante concurrir a un tribunal civil.

Luego **opone excepción de falta de legitimación pasiva y consecuentemente inoponibilidad de las acciones deducidas**, pues entre las partes existió sólo una relación estrictamente civil. Así, aduce que el Municipio no



detenta la calidad de empleadora, careciendo de legitimación pasiva para ser demandada por las acciones incoadas por el actor. Agrega que se encuentra en una imposibilidad material de crear un vínculo causal con los hechos materia de autos. Solicita que las excepciones sean acogidas, con costas.

Respecto al fondo, primero hace referencia a la regulación de las Municipalidades y las modalidades bajo las cuales pueden contratar a su personal, reiterando que la naturaleza de la relación que vinculó a las partes fue comercial en una primera etapa en el marco de la Ley 19.886 y su reglamento, y luego civil desde el 1 de enero de 2018 y hasta el término anticipado del contrato. Agrega que entre las partes no existió relación laboral y que las labores del actor asesor informático y de Ley de Transparencia, son típicas de un prestador de servicios de índole liberal. Por lo mismo, siendo un contrato de honorarios no es procedente descontar las cotizaciones de seguridad social y no está afecto a las normas relativas al ingreso mínimo mensual, pago de remuneraciones, cumplimiento de jornada de trabajo, vínculo de subordinación y dependencia ni negociación colectiva, entre otras.

Reitera que es falso que el actor se desempeñara de acuerdo a una relación laboral, sin concurrir elementos o “indicios” de laboralidad. De igual modo, expresa que el actor no prestaba sus servicios en forma exclusiva para la demandada; que desarrollaba sus labores en oficinas que eran arrendadas por él; que no tenía obligación ni control de asistencia; que no estaba sometido a jornadas de trabajo impuestas por la demandada; que emitía boletas de servicios de terceros por diferentes montos, una al mes, algunas ocasiones, 2 y 3 y en una ocasión, 4 en un mes.

Controvierte la totalidad de los hechos expuestos por el actor, en especial que haya existido una relación laboral y que se adeuden los conceptos reclamados.

En subsidio, alega que el actor no precisa a qué período se refiere y cómo calculó los distintos montos. Aduce que dicha ambigüedad impide una adecuada defensa que se ratifica con el petitorio de la demanda.



En subsidio **opone excepción de prescripción**, toda vez que la notificación de la demanda se ha efectuado el 27 de septiembre de 2022, por lo que solicita se declare la prescripción de todo feriado legal y proporcional que exceda los 2 años anteriores a la notificación de la demanda, esto es, al periodo anterior al 27 de septiembre de 2020.

En cuanto a la supuesta remuneración adeudada de agosto 2022 y 9 días del mes de septiembre de 2022, expresa que nada se adeuda en atención a la relación civil que se tuvo con el actor. No obstante, el precio de la prestación convenida no fue sufragado en el mes de agosto y septiembre, dado que hasta la fecha el actor no ha presentado boleta de honorarios ni el informe que dé cuenta de manera acreditada el cumplimiento del encargo, por lo que se encuentra en la imposibilidad de cobrar el precio, dado que no cumplió con la contraprestación.

Solicita, en definitiva que:

1. Se acoja la excepción de incompetencia absoluta del tribunal.
2. Se acoja la excepción de falta de legitimación pasiva.
3. Entre el actor y la demandada no existió relación laboral, sino una relación civil y/o comercial, rechazándose la demanda de autos.
4. La demandada no adeuda al actor ningún concepto ni suma de dinero.
5. Se condena en costas a la parte demandante.

En subsidio, solicita se declare que:

1. Se rechaza la demanda en todas sus partes.
2. La demandada no adeuda al actor ningún concepto ni suma de dinero.
3. Se condena en costas a la parte demandante.

Acto seguido en el primer otrosí **contesta la demanda de nulidad del despido**, solicitando su rechazo, con costas, remitiéndose a lo ya expuesto especialmente a las excepciones deducidas, negaciones y antecedentes de la relación civil y/o comercial alegada, agregando que resulta improcedente la acción de nulidad del despido en materia de auto despido. Reitera que en autos no existió



una relación laboral, sino que una a honorarios y un porcentaje de los mismos, fueron enterados en las entidades previsionales respectivas, de conformidad a la Ley 20.255 y su modificación por la Ley 20.894.

En el caso que se declare la existencia de la relación laboral, alega el efecto constitutivo y no declarativo de la sentencia que reconoce dicha circunstancia. Argumenta que no resulta aplicable el artículo 162 del Código del Trabajo en razón de que dicha sanción ha sido prevista solamente para el empleador que ha efectuado la retención correspondiente a las remuneraciones del trabajador y no entera los fondos en el organismo respectivo, lo que no ha sucedido en la especie, ya que la mencionada retención no se produjo por entender las partes que su vínculo era de naturaleza civil. Asimismo, su representada actuó bajo una presunción de legalidad en la forma de contratar y vincularse con el Sr. Bustamante, de conformidad al artículo 4 de la Ley 18.883. Por otro lado los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que, para ello, requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido.

En definitiva solicita se declare que:

1. Se acoge la excepción de incompetencia absoluta.
2. Se acoge la excepción de falta de legitimación pasiva.
3. La acción de nulidad del despido resulta improcedente.
4. No existió relación laboral, sino una relación civil y/o comercial.
5. No existe ni existió morosidad previsional por el periodo demandado.
- 6.- Se condena en costas a la parte demandante.

En subsidio, solicita se declare que:



1. La sentencia es de carácter constitutivo y por ende no procede la sanción establecida en el artículo 162 del Código del Trabajo ni se adeuda remuneración alguna.

2. La I. Municipalidad de Rauco actuó bajo una presunción de legalidad en la forma de contratar y vincularse con el Sr. Bustamante Ulloa al amparo de un estatuto legal determinado.

3. Se rechaza la demanda de nulidad especial en todas sus partes.

4. Se condena al actor al pago de las costas de la causa.

**3°) Audiencia Preparatoria.** Con fecha 26 de octubre de 2022 se celebró la respectiva audiencia preparatoria, en la que luego que el tribunal señalara sucintamente los fundamentos de los escritos de la etapa de discusión, se confirió traslado respecto de todas las excepciones opuestas; oportunidad en que el demandante solicitó el rechazo de las excepciones opuestas por la contraria.

En cuanto a la de incompetencia absoluta, en lo fundamental, hizo presente que su parte está persiguiendo la declaración de una relación laboral, lo que sólo puede hacer un tribunal con competencia laboral.

En relación a las excepciones de falta de legitimación pasiva e inoponibilidad de las acciones deducidas, sostuvo que deberán ser resueltas en la sentencia definitiva, conforme a la prueba que se rinda, pues conforme al principio de primacía de la realidad, su parte sostiene que en la especie ha existido una verdadera relación de subordinación y dependencia que se rige por el Código del Trabajo.

Respecto de la excepción de prescripción, alegó que por los principios de irrenunciabilidad y legalidad, el cómputo de la prescripción sólo puede comenzar a correr una vez que se declare la existencia de la relación laboral.

Seguidamente, el tribunal rechazó la excepción de incompetencia, sin costas; dejó para la sentencia definitiva la resolución de las excepciones de falta de legitimación pasiva e inoponibilidad de las acciones; y acogió la excepción de prescripción, declarando prescrito el derecho del actor para exigir la compensación





de los feriados devengados con anterioridad al 27 de septiembre de 2020, sin costas. Se deja constancia que ninguna de estas resoluciones fue objeto de algún medio de impugnación.

Con posterioridad, se realizó el llamado a conciliación; sin éxito; y se procedió a fijar los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos que se indican a continuación: (1) existencia de la relación laboral; (2) en la afirmativa del punto anterior, naturaleza y condiciones de la relación laboral; (3) en su caso, fechas de inicio y término de la relación laboral; (4) efectividad de haber cumplido el actor con las formalidades legales del despido indirecto; (5) efectividad de los hechos contenidos en la carta de despido indirecto y que éstos configuran la causal invocada; (6) si fuere del caso, remuneración del actor; (7) efectividad de adeudarse por la demandada las prestaciones que se reclaman en la demanda; (8) efectividad de existir una deuda previsional que amerite declarar la nulidad del despido indirecto.

**4°) Prueba del demandante.** En orden a acreditar sus alegaciones, el actor rindió los medios de prueba que se indican a continuación.

1. Documental:

1.1. Copia del aviso de autodespido emitido por don Eduardo José Guillermo Bustamante Ulloa, de 9 de septiembre de 2022, presentada ante la Ilustre Municipalidad de Rauco con la misma fecha, dirigida al Sr. Enrique Olivares Farías.

1.2. Copia del aviso de autodespido emitido por don Eduardo José Guillermo Bustamante Ulloa, de fecha 9 de septiembre de 2022, presentada ante la Inspección Provincial del Trabajo de Curicó.

1.3. Constancia de envío de correo a través de Correos de Chile, código de envío N°1179931982699, con fecha 9 de septiembre de 2022.

1.4. Set de Contratos de Prestación de Servicios a Honorarios, celebrados entre la Ilustre Municipalidad de Rauco, en adelante “la Municipalidad” y Eduardo Bustamante, en las siguientes fechas:



- a) 13 de enero de 2017.
- b) 28 de noviembre de 2017.
- c) 27 de diciembre de 2017.
- d) 28 de agosto de 2018.
- e) 2 de enero de 2019.
- f) 1 de enero de 2020.
- g) 2 de enero de 2021.
- h) 1 de enero de 2022.

1.5. Memorándum N°042/2017, emitida por Karina Sepúlveda Flores, Abogada de la Municipalidad, con fecha 4 de octubre de 2017.

1.6. Set de Informes de Gestión, elaborados por Eduardo Bustamante, para la Municipalidad, respecto de los periodos que a continuación se indican:

- a) febrero a mayo y julio a diciembre, inclusive de 2017.
- b) enero a diciembre, inclusive de 2018.
- c) enero a diciembre, inclusive de 2019.
- d) enero a diciembre, inclusive de 2020.
- e) enero a mayo y septiembre a diciembre, inclusive de 2021.
- f) febrero a abril y junio a julio, inclusive de 2022.

1.7. Set de Correos Electrónicos:

a) Enviado por Karina Sepúlveda (krsepulveda@munirauco.cl), para Eduardo Bustamante, con fecha 15 de noviembre de 2017, asunto: RV: PARA CONOCIMIENTO.

b) Enviado por Karina Sepúlveda (krsepulveda@munirauco.cl), para Eduardo Bustamante, con fecha 14 de diciembre de 2017, asunto: IM.Rauco\_Derivacion SAI\_AB002T-00000814\_AB02T-000000801\_Instruye Tramitación.



c) Enviado por Karina Sepúlveda (krsepulveda@munirauco.cl), para Eduardo Bustamante, con fecha 2 de abril de 2018, asunto: IM.Rauco\_2018\_Matriz Compras Publicas\_Convenio CGR\_Convoca a Reunión que Indica.

d) Enviado por Karina Sepúlveda (krsepulveda@munirauco.cl), para Eduardo Bustamante, con fecha 28 de mayo de 2018, asunto: IM.Rauco\_Inicio de Proceso de Fiscalización Transparencia 2018.

e) Enviado por Karina Sepúlveda (krsepulveda@munirauco.cl), para Eduardo Bustamante, con fecha 17 de mayo de 2019, asunto: RV: Sobre la publicación de las Ordenanzas Municipales.

f) Enviado por Karina Sepúlveda (krsepulveda@munirauco.cl), para Eduardo Bustamante, con fecha 25 de junio de 2020, asunto: IM.Rauco\_Reunion Protocolo COVID19.

g) Enviado por Karina Sepúlveda (krsepulveda@munirauco.cl), para Eduardo Bustamante, con fecha 1 de octubre de 2020, asunto: IM.Rauco\_Readecuacion de Contratos de Trabajos que Indica.

h) Enviado por Karina Sepúlveda (krsepulveda@munirauco.cl), para Eduardo Bustamante, con fecha 24 de noviembre de 2020, asunto: Modificación Ordenanza Participación Ciudadana, telemática Plan Regulador.

i) Enviado por Karina Sepúlveda (krsepulveda@munirauco.cl), para Eduardo Bustamante, con fecha 14 de marzo de 2022, asunto: Informa sobre licitación simplificada.

j) Enviado por Karina Sepúlveda (krsepulveda@munirauco.cl), para Eduardo Bustamante, con fecha 28 de marzo de 2022, asunto: Solicita información sobre licitación simplificada.

k) Enviado por Karina Sepúlveda (krsepulveda@munirauco.cl), para Eduardo Bustamante, con fecha 21 de julio de 2022, asunto: IM.Rauco\_Adaptacion Bases de Concurso.



l) Enviado por Karina Sepúlveda (krsepulveda@munirauco.cl), para Eduardo Bustamante, con fecha 11 de agosto de 2022, asunto: Envío para trato directo para capacitación concejo municipal.

1.8. Captura de Pantalla de Publicación realizada a través de página de Facebook de la I, Municipalidad de Rauco, con fecha 12 de agosto de 2020.

1.9. Set de Boletas Honorarios, emitidas por Eduardo Bustamante para la Municipalidad, en los periodos que a continuación se señalan:

- a) enero a diciembre, inclusive de 2017.
- b) enero a diciembre, inclusive de 2018.
- c) enero a diciembre, inclusive de 2019.
- d) enero a diciembre, inclusive de 2020.
- e) enero a diciembre, inclusive de 2021.
- f) enero a julio, inclusive de 2022.

## 2. Testimonial:

2.1. Felipe Eduardo Meléndez Palma, Ingeniero Comercial, cédula de identidad N°16.025.331-2, domiciliado en Simón Bolívar 64, comuna de Curicó.

## 3. Exhibición de documentos:

3.1. Set de Informes de Gestión, elaborados por Eduardo Bustamante, para la Municipalidad, en los siguientes periodos:

- a) enero y junio de 2017.
- b) junio a agosto, inclusive de 2021.

La demandante se da por satisfecha de la exhibición solicitada, el Tribunal tiene por cumplida la exhibición solicitada y por incorporados los documentos.

## 4. Oficios:

4.1. AFP MODELO.

4.2. AFC Chile S.A.



**5°) Prueba de la demandada.** Por su parte la demandada rindió en juicio las probanzas que se indican a continuación.

1. Documental:

1.1. Set de 08 copias de Contratos de Prestación de Servicios a Honorarios de fechas 13.01.2017; 28.11.2017; 27.12.2017; 28.08.2018; 02.01.2019; 01.01.2020; 02.01.2021; 01.01.2022 celebrados entre Don Eduardo Bustamante Ulloa, y la Ilustre Municipalidad de Rauco.

1.2. Set de 66 copias de Informe de Gestiones Mensuales de N° Enero/2017; 02/2017; 03/2017, 04/2017; 05/2017; 06/2017; 07/2017; 08/2017; 09/2017; 10/2017; 11/2017; 12/2017; 01/2018; 02/2018; 03/2018; 04/2018; 05/2018; 06/2018; 07/2018; 08/2018; 09/2018; 10/2018; 11/2018; 12/2018; 02/2019; 03/2019; 04/2019; 05/2019; 06/2019; 07/2019; 08/2019; 09/2019; 10/2019; 11/2019; 12/2019; 01/2020; 02/2020; 03/2020; 04/2020; 05/2020; 06/2020; 07/2020; 08/2020; 09/2020; 10/2020; 11/2020; 12/2020; 01/2021; 02/2021; 03/2021; 04/2021; 05/2021; 06/2021; 07/2021; 08/2021; 09/2021; 10/2021; 11/2021; 12/2021; 01/2022; 02/2022; 03/2022; 04/2022; 05/2022; 06/2022; 07/2022; celebrados entre Don Eduardo Bustamante Ulloa, y la Ilustre Municipalidad de Rauco.

1.3. Set de 66 copias de Boleta de Honorarios N°s 7/2017; 11/2017; 13/2017; 15/2017; 17/2017; 19/2017; 21/2017; 23/2017; 25/2017; 28/2017; 30/2017; 31/2017; 32/2018; 33/2018; 35/2018; 36/2018; 38/2018; 39/2018; 40/2018; 41/2018; 42/2018; 43/2018; 47/2018; 48/2019; 50/2019; 51/2019; 52/2019; 53/2019; 55/2019; 56/2019; 58/2019; 59/2019; 60/2019; 61/2019; 62/2019; 63/2020; 65/2020; 66/2020; 67/2020; 68/2020; 69/2020; 70/2020; 71/2020; 72/2020; 73/2020; 74/2020; 80/2021; 81/2021; 82/2021; 83/2021; 84/2021; 87/2021; 88/2021; 89/2021; 90/2021; 91/2021; 93/2021; 92/2022; 95/2022; 96/2022; 97/2022; 99/2022; 101/2022; 103/2022; 105/2022; emitidas por el actor Sr. Eduardo Bustamante Ulloa dirigidas a la Ilustre Municipalidad de Rauco.

1.4. La parte desiste de estos documentos.



1.5. Copia de Certificado de fecha 24 de octubre de 2022, emitido por Doña Valeria Bravo Valenzuela.

1.6. Copia de Certificado de fecha 24 de octubre de 2022, emitido por Doña Miriam Silva Reyes, sobre reloj control.

1.7. Copia de Certificado de fecha 24 de octubre de 2022, emitido por Doña Bárbara Pino Cordero.

1.8. Copia de Certificado de fecha 24 de octubre de 2022, emitido por Doña Miriam Silva Reyes, sobre pólizas funcionarias.

1.9. Copia de Decreto Alcaldicio N°262, de fecha 09.02.2022.

1.10. Set de 19 capturas de conversación de *Whatsapp* en que interviene en calidad de emisor el contacto Eduardo Bustamante.

1.11. Certificado de Ministro de Fe (s) Sr. Felipe Rojas Núñez, de fecha 18.10.2022.

1.12. Copia de Oficio del Consejo para la Transparencia a la Ilustre Municipalidad de Rauco E16624 de fecha 31.08.2022.

1.13. Copia de Decreto Alcaldicio de N°1740, de fecha 13.09.2022.

## 2. Confesional:

2.1. Absuelve don Eduardo José Guillermo Bustamante Ulloa.

## 3. Testimonial:

3.1. Carolina Ignacia Solís Rivera, RUT 16.729.199-6, Arquitecta, con domicilio en 35 y media oriente A, N° 3333, Talca.

3.2. Felipe Esteban Ignacio Rojas Núñez, RUT: 12.768.830-3, periodista, domiciliado en calle 36 oriente 1545, sector Las Brisas del Parque, de Talca.

3.3. Bernardita De Las Mercedes Navarro Serrano, RUT: 14.474.181-1, Técnico en administración, con domicilio en Población Luis Cruz Martínez, pasaje 1, sitio 8, Rauco.



3.4. José Miguel Umaña Escobar, RUT: 18227362-7, Abogado, con domicilio en 3 Poniente 335, Villa Pucará, comuna y ciudad de Talca.

4. Oficios:

4.1. Universidad Católica Del Maule, Escuela de Administración Pública.

4.2. Comité de Bienestar de la Ilustre Municipalidad de Rauco.

4.3. Dirección de Administración y Finanzas de la Ilustre Municipalidad de Rauco.

4.4. Asociación de Funcionarios de la Ilustre Municipalidad de Rauco.

**6°) En cuanto a la relación laboral reclamada en la demanda.** El actor ha comparecido ante este tribunal, solicitando, en lo medular, que se declare que entre él y el municipio demandado ha existido una relación laboral que se ha extendido de forma continua entre los días 1 de enero de 2017 y 9 de septiembre del año 2022, fecha esta última en que procedió a su despido indirecto. De esta manera, asegura que las múltiples contrataciones a honorarios que han sido pactadas entre las partes, en realidad sólo encubrían dicho vínculo laboral, pues fueron celebradas con infracción a lo previsto en el artículo 4 de la Ley 18.883, existiendo además una verdadera relación de subordinación y dependencia. Por su parte, la demandada ha negado que entre las partes haya existido en dicho período una relación laboral, sino primero una relación comercial amparada en la Ley 19.886, lo que se dio entre los días 1 de enero de 2017 y 30 de noviembre de 2017; y segundo, una relación tipo civil por honorarios profesionales para labores accidentales y que no son las habituales de la municipalidad, según lo previsto en el artículo 4 inciso 1° de la Ley 18.883, circunstancia a su turno que se extendió entre los días 1 de enero de 2018 y 9 de septiembre de 2022.

Frente a dicho asunto litigioso y en lo meramente fáctico, es preciso destacar que el primero de los contratos a honorarios suscritos entre las partes de fecha 13 de enero de 2017, efectivamente habla en su cláusula primera referida a los antecedentes de la contratación, de la *“Solicitud N° 11999, respecto de compra de servicio de Don EDUARDO JOSÉ GUILLERMO BUSTAMANTE ULLOA”*;



estableciéndose luego en su cláusula tercera que el contrato se ejecutará desde el momento de su “adjudicación” y hasta el día 30 de noviembre de 2017, lo que sería indicativo de la pretensión manifestada por el municipio en su contestación, relativa a que en ese período entre las partes existió sólo una relación mercantil amparada en la Ley 19.886.

Al efecto, se debe advertir que la citada Ley 19.886 regula las bases de los contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. Así, su artículo 1 prescribe que *“Los contratos que celebre la Administración del Estado, a título oneroso, para el suministro de bienes muebles, y de los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones, se ajustarán a las normas y principios del presente cuerpo legal y de su reglamentación. Supletoriamente, se les aplicarán las normas de Derecho Público y, en defecto de aquéllas, las normas del Derecho Privado.”* Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 3 prevé una serie de situaciones que quedan expresamente excluidas de la aplicación de dicha ley, contemplando entre ellas en su literal a), las siguientes: *“Las contrataciones de personal de la Administración del Estado reguladas por estatutos especiales y los contratos a honorarios que se celebren con personas naturales para que presten servicios a los organismos públicos, cualquiera que sea la fuente legal en que se sustenten”*.

La razón de lo anterior es evidente, pues el legislador ha establecido una serie de condiciones para que los organismos de la Administración del Estado puedan celebrar contratos de prestación de servicios a honorarios, las que se verían burladas si bastase invocar el procedimiento previsto en la citada Ley 19.886, para que tales entidades pudieran hacer uso de dicha modalidad de contratación, sin apego a ningún tipo de exigencia.

Es por lo anterior que resulta palmario para este juez que dicha primera contratación de fecha 13 de enero de 2017 ha sido realizada por el municipio con infracción a la legalidad vigente, en particular a la prohibición establecida en el artículo 3 letra a) de la Ley 19.886. Por el mismo motivo, se desoirá su alegación relativa a que en dicha época existió entre las partes una mera relación comercial.





A su turno, es pertinente destacar que la correcta resolución de este caso no pasa tanto por analizar si en la especie concurren indicios de laboralidad en los términos descritos en los artículos 7 y 8 del Código del Trabajo, como suele ocurrir con la generalidad de las acciones de declaración de relación laboral; sino, más bien, por examinar si la celebración y ejecución de las contrataciones a honorarios de autos respetaron el marco normativo expresado en el inciso 1° del artículo 4 de la Ley 18.883. Lo anterior, pues estamos frente a un organismo público que debe ceñir su actuar al principio de legalidad, de manera que si ha existido una infracción a dicho estatuto, y no detentando el actor ninguna otra calidad de aquellas previstas en la Ley 18.883, no quedaría más que concluir que la prestación de los servicios del actor se enmarcó dentro de las normas del derecho común, en este caso, de la normativa del Código del Trabajo. En otras palabras, el municipio no podría alegar que se está frente a una mera prestación civil de servicios a honorarios, en desmedro de los derechos del demandante, si no ha respetado las normas que la autorizarían para proceder a tal tipo de contrataciones.

Sobre el particular y según se ha señalado antes, conviene destacar que el municipio no ha invocado ninguna de las hipótesis permitidas en la Ley 18.883 para la contratación a honorarios del actor para el período que va de enero a noviembre de 2017; sino sólo el estatuto de la Ley 19.886, el que resulta absolutamente inaplicable en la especie; y luego, para el periodo que se inicia el 1 de enero de 2017, invocó la hipótesis de labores accidentales y no habituales del municipio del artículo 4 inciso 1° de la Ley 18.883.

Dicho lo anterior, conviene ahora recordar que el artículo 4 de la Ley 18.883 establece lo siguiente:

“Podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad; mediante decreto del alcalde. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base



*de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.*

*Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.*

*Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto.”*

Como se puede apreciar, el inciso 1° del artículo 4 de la Ley 18.883, regula una primera hipótesis en que es lícito que los municipios contraten servicios a honorarios, esto es, cuando se trate de servicios prestados por profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, pero siempre que correspondan a *“labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad”*.

De igual modo, es preciso ahora analizar los conceptos de accidentabilidad y no habitualidad que utiliza la ley.

Desde la perspectiva de su sentido natural obvio y conforme a la Real Academia de la Lengua Española, la palabra “accidental”, significa *“no esencial”* o *“casual, contingente”*. A su turno, “habitual”, puede ser entendido como algo *“que se hace, padece o posee con continuación o por hábito”*.

De esta forma y desde un punto de vista semántico, es posible entender que ambas hipótesis normativas apuntan a una misma circunstancia de tratarse de labores que no respondan a aquellas que permanentemente deben satisfacer los municipios, lo que es de toda lógica, pues para tales funciones la ley les ha entregado sus plantas permanentes e incluso la posibilidad de contar con funcionarios a contrata.

Es por lo anterior que el significado de “accidental” que mejor se aviene a ley es aquél que se expresa como *“casual, contingente”*; de manera que se estará frente a *“labores accidentales”* que habilitarían a los municipios a contratar a un profesional bajo la figura de honorarios, en la medida que respondan a una



necesidad que surge a propósito de algún hecho puntual o contingente y que, por lo mismo, tienen un horizonte de término relativamente cercano o previsible según la necesidad o contingencia que pretenden satisfacer.

Adicionalmente, la ley ha sido clara en que no debe tratarse de aquellas labores que habitualmente los municipios deben atender, es decir, de funciones que no se deben realizar de manera continua o por hábito.

Pues bien, la demandada ha invocado el inciso 1° del artículo 4 de la Ley 18.883 para todas las contrataciones del actor posteriores a la supuesta relación mercantil -ya descartada-, por las cuales se pactaron los servicios de “asesoría informática y transparencia para la Unidad de Transparencia Municipal”, “asesor de la Ley de Transparencia y apoyo informático en plataformas” y “asesoría informática y transparencia”, lo que además se condice con el tenor de las contrataciones allegadas por ambas partes al proceso.

Sin perjuicio de lo anterior, no es posible entender que tales tareas sean realmente accidentales y no habituales del municipio.

En primer término conspira en contra de la pretensión del municipio la extensión misma de los servicios prestados por el actor, pues se extendieron por más 5 años. De esta suerte, conforme al avance de la tecnología y su incorporación a los servicios públicos, no resulta razonable siquiera pensar que las labores para las que fue contratado el actor de “asesoría informática”, puedan ser estimadas como accidentales, pues más bien responden a una necesidad permanente del municipio. De igual forma, desde un punto de vista legal, no es procedente calificar como accidental o no habitual el cumplimiento de las exigencias que impone la Ley de Transparencia, lo que por propia definición responde a un imperativo legal permanente a que se debe someter el municipio demandado, al igual que todas las demás instituciones públicas.

Por otro lado, al revisar los contratos del actor, se advierte que no hay ningún detalle en ellos que permita entender que se estaba frente a una necesidad accidental y no habitual, sino más bien de su lectura queda claro que en realidad



la municipalidad buscaba satisfacer necesidades permanentes, lo que no se condice con los requisitos del artículo 4 inciso 1° de la Ley 18.883.

En efecto, el contrato de 13 de enero de 2017, da cuenta de la contratación de los servicios del actor en los siguientes términos *“apoyo informático que permita suplir necesidades propias del servicio, en el ámbito de redes, programación, sitio web y plataformas”*. Luego, el contrato de 28 de noviembre de 2017, si bien utiliza una redacción diferente, en realidad alude a los mismos servicios antes descritos, al señalar que la contratación es para el cargo o función de *“Asesor informático, el cual tendrá que cumplir los siguientes encargos específicos: servicio de apoyo informático que permita suplir necesidades propias del servicio, en el ámbito de redes, programación, sitio web y plataformas de transparencia, lobby y probidad...”*.

A su turno, los contratos de 27 de diciembre de 2017 y 28 de agosto de 2018 hablan ahora del siguiente “cometido específico”: *“Servicio de Asesor Informático y Transparencia, para Unidad de Transparencia”*. Después, el contrato de 2 de enero de 2019 describe como labor contratada la de *“Servicio de Asesor de Transparencia, apoyo en informático en plataformas tales ej. Lobby, intereses y patrimonio, servicio que apoyará la labor de la Unidad Jurídico y Transparencia”*. El contrato de 1 de enero de 2020 da cuenta de la prestación profesional de *“Servicio de Asesor Informático y Transparencia, Dependencia de Asesor Jurídico”*. De igual modo, sólo con algunas diferencias de redacción el contrato de 2 de enero de 2021 menciona como *“cometido accidental y específico”* el *“Servicio de Asesor Informático y Transparencia de la Ilustre Municipalidad de Rauco, dependiente de la asesora jurídica municipal”*. Por último, el contrato de 2 de enero de 2022, expresa como *“cometido accidental y específico”* el *“Servicio de Asesor Informático y Transparencia de la Ilustre Municipalidad de Rauco”*.

De tales instrumentos es posible colegir que ninguno de ellos da cuenta realmente de una actividad accidental y no habitual, sino más bien a tareas permanentes al interior de la organización o, como dicen algunos de dichos instrumentos, para atender *“las necesidades propias del servicio”*.



Por otro lado, muchos de tales contratos hablan de encargos o cometidos específicos, pareciendo aludir así a la hipótesis normativa del inciso 2° del artículo 4 de la Ley 18.883, o incluso de cometidos “accidentales y específicos”, confundiendo los supuestos diversos de los incisos 1° y 2° del citado precepto. En cualquier caso, no corresponde analizar en autos las exigencias del inciso 2° del artículo 4 de la Ley 18.883, pues la demandada circunscribió su contestación a la supuesta contratación de “funciones accidentales”, con lo que ha invocado la normativa del inciso 1° del artículo 4 de la Ley 18.883 y no la del inciso 2°. Con todo, baste con decir que ninguna de las contrataciones ya mencionadas cumple con las exigencias de especificidad del citado inciso 2°, pues responden a alusiones del todo genéricas a fin de responder a las necesidades generales del servicio en materias informáticas y de transparencia, y que por ende alcanzarían a cualquier actividad que aborde tales temáticas y que se extendieron indefinidamente en el tiempo.

Por otra parte, conviene analizar también la ejecución misma de las labores del actor. Así, se puede advertir que las tareas prestadas en los hechos por el demandante incluso excedieron los márgenes genéricos para los que fue formalmente contratado a honorarios y los de su experticia como ingeniero informático.

En efecto, en sus informes de gestión, los que eran visados por sus jefaturas como condición para el pago de sus honorarios, constan actividades tales como confección de afiches de permiso de circulación, apoyo en confección de pendones para Centros de Acción de la Mujer, elaboración de video de actividad “Cerro Pelao”, apoyo en desarrollo de material gráfico para actividad del Departamento Social, apoyo en desarrollo de tríptico y díptico para promoción de actividades culturales, apoyo en tramitación de decretos de adjudicación mediante trato directo, apoyo a asesor jurídico en modificación de formatos y redacción de documentos, apoyo en proceso de ventas de permisos de circulación, traspaso de permisos de otras comunas, asistencia a reuniones de coordinación de la unidad jurídica y búsqueda de jurisprudencia.



Del mismo modo, la información consignada en los correos electrónicos aportados por el demandante, dan cuenta que éste se encontraba bajo la subordinación y dependencia de la asesora jurídica de la municipalidad, doña Karina Sepúlveda, viéndose incluso en la obligación de asistir a reuniones con otros departamentos de la municipalidad, en representación de la Sra. Sepúlveda, lo que no se condice en caso alguno con una mera prestación de servicios de carácter civil, acotada a su formación de ingeniero informático, pues llegó incluso, como se dijo, a representar a dicha unidad jurídica. Asimismo, en una oportunidad se le ordenó redactar un decreto rectificatorio, enmendando su numeración, e incluso la redacción de un protocolo para evitar contagios “Covid”, la confección de contratos a plazo fijo y entrega de un formato refundido de una ordenanza, la modificación del reglamento de compras públicas, y dar formato a las bases de un concurso de director de control interno.

De igual manera, el actor incorporó al juicio una captura de pantalla, no objetada por la contraria, relativa a una noticia difundida con fecha 12 de agosto de 2020 en redes sociales por el propio municipio que señala *“Porque queremos que te sientas seguro... El ingeniero informático Eduardo Bustamante, nos entrega recomendaciones para protegernos de estafas vía telefónica, correo electrónico, páginas bancarias, entre otras. #RaucoContigo”*, en la que además aparece la imagen del actor.

En definitiva, la municipalidad no ajustó su actuar a la legalidad vigente al haber contratado al actor a través de sucesivos contratos a honorarios; pues, primero, acudió al estatuto de la Ley 19.886, yendo en contra de la prohibición expresa consignada en la letra a) del artículo 3 de la citada ley; y segundo, porque no respetó las exigencias que para estos efectos prevé el artículo 4 de la Ley 18.883. Adicionalmente, en la práctica, el actor se vio obligado a cumplir tareas que no aparecían genéricamente indicadas en sus contrataciones y que por lo demás ni siquiera guardaban relación con su formación profesional de ingeniero informático, encontrándose bajo la subordinación de la asesora jurídica de la municipalidad. De esta forma, habiéndose transgredido el artículo 4 de la Ley



18.883 y al no estar afecto el actor a ninguna modalidad estatutaria, necesariamente debe calificarse su vinculación como una relación laboral.

Luego, la antedicha relación laboral debe ser calificada como de duración indefinida, pues, primero, esa es la regla general en nuestro ordenamiento laboral, esto es, si no se pacta expresamente una modalidad diversa, necesariamente el contrato de trabajo debe ser considerado como uno de carácter indefinido; y, segundo, porque las funciones desempeñadas por el actor, tal y como ya fue explicado, se vincularon con la satisfacción de necesidades permanentes del servicio.

En cuanto a la extensión de la relación laboral, se debe precisar que el primer contrato es de fecha 13 de enero de 2017 y fija el inicio de la prestación de los servicios a contar del “día de la adjudicación”, sin que haya información precisa de cuándo habría ocurrido ello. Sin perjuicio de lo anterior, si se observa el pacto de honorarios, se puede ver que se fijó la suma de \$6.050.000, dividida en 11 cuotas mensuales, iguales y sucesivas pagaderas los días 30 de cada mes, finalizando el 30 de noviembre de 2017. De esta forma, el día 30 de enero de 2017, se le pagó un honorario por la mensualidad completa y habiéndose tenido por acreditada la relación laboral, ello debe ser reputado como constitutiva de una remuneración por la totalidad del mes. Así, corresponde fijar el inicio de la relación laboral en la misma fecha invocada en la demanda, esto es, el día 1 de enero de 2017.

Con posterioridad a tal primera contratación, existen contratos sucesivos que mantuvieron la vinculación de forma continua y permanente hasta la fecha del despido indirecto ocurrido el día 9 de septiembre de 2022, con la sola salvedad del día 1 de enero de 2021, que no quedó expresamente cubierto por ninguno de los contratos a honorarios bajo análisis. Sin embargo, atendida la extensión del contrato y las labores permanentes que debió realizar el actor, se estima que la existencia de un solo día sin el cobijo formal de un contrato a honorarios no es óbice para satisfacer la continuidad de la relación laboral. Lo anterior, no sólo porque los servicios se prestaron de manera ininterrumpida desde el 1 de enero



de 2017, sino porque además se trata de un día feriado, donde es evidente que no era posible desarrollar labor alguna en virtud del contrato de trabajo y porque además ese mes la demandada pagó el honorario -entiéndase la remuneración-, de manera íntegra, es decir, por la totalidad del mes trabajado, al igual que todos los demás meses de esa anualidad.

En definitiva, se ha logrado acreditar en autos una relación laboral continua e ininterrumpida desde el 1 de enero de 2017 y hasta el 9 de septiembre de 2022.

**7°) Respecto de las excepciones de falta de legitimación pasiva e inoponibilidad de las acciones.** En atención a lo razonado en la motivación precedente y habiéndose tenido por acreditada la existencia de una relación laboral entre las partes que se extendió entre los días 1 de enero de 2017 y 9 de septiembre de 2022, no queda más que rechazar las excepciones opuestas por la demandada relativas a la falta de legitimación pasiva e inoponibilidad de las acciones deducidas en su contra.

**8°) En cuanto a la justificación del despido indirecto.** Como punto de partida, conviene advertir que en autos fue el actor quien puso término a su contrato de trabajo por medio de la figura del despido indirecto regulado en el artículo 171 del Código del Trabajo.

Así y conforme a las probanzas aportadas por el demandante en los numerales 1.1., 1.2. y 1.3. de su documental, se puede tener por establecido que con fecha 9 de septiembre de 2022 puso término a su relación laboral, a través de la respectiva comunicación, misma que funda tal decisión en la causal del artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, esto es, en el incumplimiento grave de la demandada a las obligaciones que le imponía el contrato de trabajo. Adicionalmente, se puede apreciar que la señalada carta de despido indirecto fue remitida el mismo día 9 de septiembre de 2022 tanto a la demandada como a la Inspección del Trabajo, por lo que en autos es posible tener por acreditado que el demandante cumplió con las formalidades legales de su autodespido.

Luego, en cuanto a los hechos consignados en la carta de despido indirecto para fundar la causal invocada, ésta refiere luego de mencionar la fecha de





ingreso al servicio y las continuas renovaciones de sus contratos a honorarios, que *“No se me han pagado mis cotizaciones previsionales y de seguridad social desde que ingresé a trabajar”*.

Conforme se ha venido reflexionando en esta sentencia, se puede tener por plenamente acreditado el hecho fundante de la carta de despido indirecto, esto es, el no pago por parte de la municipalidad demandada de las cotizaciones de seguridad social del actor.

Como se ha dicho, el demandante prestó sus servicios formalmente como a honorarios y, por ende, la municipalidad no cumplió con su obligación de enterar las cotizaciones ante las entidades respectivas, asunto que además aparece corroborado por las respuestas recibidas a los oficios dirigidos a AFP Modelo y AFC Chile, donde se puede apreciar que en el período en análisis no consta ningún pago de cotizaciones que haya sido efectuado por el municipio demandado.

En tal sentido, este juez estima que el hecho que el actor haya estado en condiciones de pagar íntegramente sus propias cotizaciones previsionales con cargo a los honorarios entregados por el municipio, en nada hace variar lo analizado, pues ello pasa por alto la circunstancia que en una relación laboral es la empleadora la obligada al pago de las mismas y que de hecho, el inciso 2° del artículo 3 de la Ley 17.322, expresamente prescribe que *“Se presumirá de derecho que se han efectuado los descuentos a que se refiere ese mismo artículo, por el solo hecho de haberse pagado total o parcialmente las respectivas remuneraciones a los trabajadores”,* para luego agregar que *“Si se hubiere omitido practicar dichos descuentos, será de cargo del empleador el pago de las sumas que por tal concepto se adeuden.”*.

Sobre el particular, se ha dicho que uno de los fundamentos del despido indirecto guarda relación con la equidad y la justicia dado que *“...si en un contrato bilateral una de las partes no cumple con sus obligaciones, la otra puede desligarse del vínculo jurídico, dejando sin efecto la relación contractual...”* y que ello se da, entre otras hipótesis, ante un *“Incumplimiento grave de las obligaciones*



*que impone el contrato, como por ejemplo el no pago de las remuneraciones, el no pago de las cotizaciones previsionales, un jus variandi abusivo, el no otorgar ocupación efectiva y adecuada, el no respetar las normas sobre licencias médicas, etc.”* (Sergio Gamonal Contreras y Caterina Guidi Moggina. Manual del Contrato de Trabajo. Santiago: Thomson Reuters, 2015, páginas 461 y 462).

Por otro lado, jurisprudencialmente se ha sostenido de manera reiterada que el no pago de cotizaciones previsionales constituye un incumplimiento grave por parte del empleador de las obligaciones que le impone el contrato de trabajo y que, por ende, es constitutivo de la causal de término del artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo y habilita al trabajador para proceder a la figura del despido indirecto. En efecto, la Excelentísima Corte Suprema, en los autos Rol 31.913-2019, expresamente señaló que el no pago por parte del empleador de las cotizaciones de seguridad social, “...sólo puede ser calificado de grave, por lo que permite configurar la causal de terminación de contrato prevista en el artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, que conforme al artículo 171 del mismo cuerpo legal puede ser esgrimida por el trabajador en contra del empleador y cuya consecuencia es el pago de las indemnizaciones y recargos legales consecuentes.”.

De esta manera, se tendrá en autos por configurada la causal del artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, por el no pago de la demandada de las cotizaciones de seguridad social del actor. Por lo anterior, se condenará a la empleadora al pago de las indemnizaciones sustitutiva del aviso previo y por años de servicio, más el recargo del 50% del artículo 171 inciso 1° del Código del Trabajo.

**9°) Respecto de la base de cálculo y el monto de las indemnizaciones por la justificación del despido indirecto.** La demanda afirma que se debe considerar para efectos del artículo 172 del Código del Trabajo la suma de \$777.778, suma que es plenamente coincidente con los últimos honorarios mensuales que le fueron enterados por la demandada, según se puede apreciar de las boletas aportadas por el actor. Es por lo anterior y no existiendo además un



monto diverso que haya sido expresa y concretamente alegado por la municipalidad, es que se tendrá el señalado valor de \$777.778 como remuneración del demandante para todos los efectos legales.

Es por lo anterior, que se condenará a la demandada al pago de una indemnización sustitutiva del aviso previo por \$777.778 y una indemnización por años de servicio por \$4.666.668. Asimismo, se condenará al municipio al pago del recargo del 50% a que se refiere el artículo 171 inciso 1° del Código del Trabajo, por un valor de \$2.333.334, monto que se obtiene al aplicar el referido porcentaje al valor de la indemnización por años de servicio y sin adicionar a dicha base la indemnización sustitutiva del aviso previo como pretende el actor, conforme al claro tenor de la ley.

**10°) Sobre el cobro de prestaciones.** En primer lugar, se debe reiterar que en autos se ha tenido por acreditado que la demandada adeuda la totalidad de las cotizaciones de seguridad social del actor. Sin perjuicio de lo anterior y en atención a lo dispuesto en la Ley 17.322 y en el artículo 461 del Código del Trabajo, para la liquidación y cobro de la totalidad de las cotizaciones adeudadas, se ordenará oficiar a las entidades respectivas, teniendo especialmente en consideración para estos efectos lo dispuesto en el artículo 4 bis de la mencionada Ley 17.322.

Asimismo, en cuanto a la compensación del feriado reclamado, atento a lo previsto en el artículo 1698 del Código Civil y no habiéndose rendido por la demandada probanza alguna que dé cuenta que el actor ha hecho uso de sus días de feriado o que éstos fueron debidamente compensados al término de la relación laboral, es que la municipalidad será condenada a dichas prestaciones.

Ahora bien, conforme a la prescripción declarada en la audiencia preparatoria, para estos efectos corresponde únicamente considerar el tiempo trabajado entre los días 27 de septiembre de 2020 y 9 de septiembre de 2022, es decir, 1 año, 11 meses y 13 días. Es por lo mismo que dicho periodo trabajado representa un feriado legal y proporcional equivalente a 29,29 días hábiles.



Asimismo, habida cuenta de la fecha de término de la relación laboral -9 de septiembre de 2022- y al tenor de lo previsto en los artículos 69 y 73 del Código del Trabajo, tales 29,29 días hábiles se traducen en 46,29 días corridos que equivalen a \$1.200.111.

Por otro lado, el actor ha reclamado que su remuneración íntegra del mes de agosto de 2022 y la remuneración de 8 días trabajados en el mes de septiembre de 2022 se encuentran impagas, por lo que al tenor del artículo 1698 del Código Civil y no habiendo rendido prueba alguna la demandada en orden a acreditar su solución, es que se hará lugar al concepto en cuestión.

Por lo anterior, se condenará a la municipalidad demandada a pagar en favor del actor la suma de \$985.185 por las remuneraciones adeudadas de los días trabajados en los meses de agosto y septiembre de 2022.

**11°) En relación a la nulidad del despido.** No obstante que se ha tenido por acreditado que al momento del despido indirecto existía una deuda previsional de parte de la municipalidad, este juez estima que en la especie no resulta aplicable la nulidad del despido regulada en el artículo 162 del Código del Trabajo.

En este sentido, este juez adscribe plenamente a la doctrina sustentada por la Excelentísima Corte Suprema, a través de fallos de unificación de jurisprudencia, conforme a los cuales la señalada sanción de la nulidad del despido no es procedente tratándose de organismos públicos cuando los trabajadores han prestado sus servicios formalmente a honorarios y es la sentencia la que declara la existencia de la respectiva relación laboral.

Así, nuestro Máximo Tribunal de manera uniforme y consistente en los últimos años ha sostenido, entre otras causas, en los autos Rol 27.650-2019 que *“...tratándose, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado –entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575–, a juicio de esta Corte, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la referida institución, [la nulidad del despido] cual es que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se*



*encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido.”, para luego afirmar que “...en otra línea argumentativa, la aplicación –en estos casos– de la institución contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que, para ello, requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio firme, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido.”. De esta manera, la Excelentísima Corte Suprema finalmente concluye que “no procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector”.*

Conforme a lo razonado, se desestimaré la acción de nulidad del despido incoada por el actor.

**12°) Análisis del resto de la prueba.** El resto de la prueba rendida y no valorada expresamente hasta el momento en nada cambia lo ya analizado.

Sobre el particular y tratándose de la prueba del actor, se debe mencionar que el Memorándum N°042/2017, sólo da cuenta de una instrucción dirigida al actor por parte de la abogada doña Karina Sepúlveda Flores, por lo que no tiene la aptitud para desvirtuar las conclusiones de esta sentencia. A su turno, la declaración del testigo don Felipe Eduardo Meléndez Palma, en general se centró en entregar lo que podríamos denominar como indicios de laboralidad, en particular, que el lugar de prestación de los servicios del actor correspondía a las dependencias del municipio y que él se encontraba sujeto a dirección, jornada laboral y control de horarios. Del mismo modo, depuso en torno a los informes de gestión que debían realizar todos los servidores a honorarios, detallando las actividades desarrolladas durante cada mes, el que una vez aprobado por el municipio, habilitaba el pago de la boleta respectiva. Como se puede apreciar, esta información tampoco tiene la aptitud de alterar lo razonado y, de hecho, como



ya fuera explicado, deja de ser realmente sustancial ante la infracción cometida por el municipio a las normas que regulan la prestación de servicios a honorarios en dichas reparticiones públicas.

En relación a la prueba de la demandada, se debe señalar que los certificados de los numerales 1.5. a 1.9. responden sólo a antecedentes con un escaso valor probatorio, pues fueron elaborados por el propio municipio y con posterioridad y a propósito de la interposición de la demanda de autos. Por lo demás, tan sólo buscan relativizar en la especie eventuales indicios de laboralidad referidos al mobiliario usado por el actor en el cometido de sus funciones, el control de horarios, el uso de teléfono celular proporcionado por la municipalidad y la existencia de uso de pólizas funcionarias por conducción de vehículos municipales. Como se puede ver, tales materias no pueden afectar el análisis desarrollado en esta sentencia a propósito de la vulneración de parte del municipio de las prescripciones del artículo 3 letra a) de la Ley 19.886 y del artículo 4 de la Ley 18.883, así como tampoco que el actor en la práctica se vio incluso obligado a realizar labores ajenas de aquellas señaladas en sus contrataciones a honorarios.

Por su parte, el Decreto Alcaldicio N° 262, de fecha 9 de febrero de 2022, tiene una escasa relación directa con los hechos de la causa, pues tan solo da cuenta del cese de las jornadas de trabajo excepcionales adoptadas con motivo de la pandemia por Covid 19 y del uso obligatorio a contar de ese momento del sistema de control biométrico de asistencia.

Por otro lado, las capturas de conversación de *Whatsapp* acompañadas tan solo refieren que en diversas ocasiones el actor no se encontraba en la Municipalidad. Al efecto, se debe señalar que el certificado emitido por don Felipe Rojas Núñez, de fecha 18 de octubre de 2022, busca dotar de autenticidad a la referida a dichas conversaciones por *Whatsapp* (y de unos audios que no fueron incorporados al juicio), lo que importa un nulo valor probatorio de este instrumento por sí solo, pues el funcionario no detenta ninguna prerrogativa notarial y sus facultades de ministro de fe se agotan en las funciones propias del quehacer municipal. Sin perjuicio de lo anterior, se debe citar también la respuesta al oficio



dirigido a la Universidad Católica del Maule, que informó que el actor desarrolló actividades en dicha institución como profesor *part-time*, durante el primer semestre de 2022, que se extendió entre los días 14 de marzo al 15 de julio de 2022, realizando clases los días lunes y miércoles de 10:50 a 12:55 horas, circunstancia esta última que fue reconocida por el propio actor en su absolución de posiciones. Todas estas probanzas fueron sostenidas por la demandada como indicativas, a su juicio, de la inexistencia de una jornada de trabajo, excluyendo así una relación de subordinación y dependencia. Sin embargo, como ya fuera tantas veces señalado, la eventual inexistencia de una jornada de trabajo rígida no puede alterar las conclusiones consignadas en este fallo sobre la prohibición legal de aplicar al demandante el estatuto de la Ley 19.886, que las labores contratadas se vinculaban con necesidades permanentes del servicio y no aquellas que autoriza el artículo 4 de la Ley 18.883, y que el trabajador en los hechos se vio incluso obligado a realizar tareas no comprendidas en sus contratos a honorarios, elemento del que, por lo demás, resulta patente su subordinación y dependencia.

Adicionalmente, los documentos 1.12. y 1.13. dan cuenta de un incumplimiento que la demandada atribuye al actor, pero que ninguna pertinencia tiene con el objeto litigioso de autos, pues en modo alguno excluye la relación laboral alegada por el actor. Es más, se trata de circunstancias que ni siquiera aparecen expresamente señaladas en la extensa contestación de la demanda, por lo que en realidad son ajenas a los márgenes en que se trabó la litis.

En cuanto a la absolución de posiciones del actor, ésta se centró especialmente en el supuesto incumplimiento de las obligaciones del actor, según la información consignada en el documento 1.12. antes referido, así como también en las clases dadas por él en la Universidad Católica del Maule; ambas cuestiones que, como se dijo, no son sustanciales para la adecuada resolución del asunto.

En cuanto a la prueba testimonial, los dichos de los testigos doña Carolina Ignacia Solís Rivera, don Felipe Esteban Ignacio Rojas Núñez, doña Bernardita De Las Mercedes Navarro Serrano y don José Miguel Umaña Escobar, en general estuvieron destinados a describir las funciones del actor, que prestó servicios



sobre la base de diversos contratos a honorarios y la inexistencia de indicios de laboralidad. Sin embargo, tales asertos no tienen el mérito para desvirtuar la información consignada en la prueba documental aportada por ambas partes y con arreglo a la cual este juez concluyó que existió una infracción a lo previsto en el artículo 4 de la Ley 18.883, de manera que sólo es posible entender la vinculación del actor con el municipio como una relación laboral.

Con todo cabe consignar que la testigo doña Carolina Ignacia Solís Rivera, señaló que el actor prestaba servicios a honorarios, para la realización de tareas y objetivos específicos, según el detalle de sus términos de referencia. De esta suerte, es lógico pensar que de haber existido tales términos de referencia, éstos debieron haber constado en cada uno de los contratos del actor, ya sea en ellos mismos, o bien en un anexo; no obstante, estos supuestos términos de referencia no fueron incorporados al juicio, sino sólo los contratos a honorarios, los que son del todo genéricos y aluden a tareas generales, propias y permanentes del municipio, según ya fue apuntado.

En tal sentido, los testigos doña Bernardita De Las Mercedes Navarro Serrano y don José Miguel Umaña Escobar, fueron contestes en señalar que las funciones para las cuales el actor había sido contratado, se siguen realizando hasta el día de hoy, por una persona que lo reemplazó en la función, lo que nuevamente permite entender que se trata de labores permanentes y propias del municipio y no de aquellas que trata el artículo 4 de la Ley 18.883.

Por último, las respuestas a los oficios dirigidos al Comité de Bienestar y la Asociación de Funcionarios de la Ilustre Municipalidad de Rauco, dando cuenta que el actor no forma parte de sus registros, tampoco pueden alterar los razonado, pues son representativos de la formalidad ya descrita conforme a la cual éste se encontraba vinculado con el municipio sólo a través de contratos a honorarios. Lo mismo se puede decir respecto de la respuesta al oficio dirigido a la Dirección de Administración y Finanzas del propio municipio que solo reitera la posición sustentada por la demandada en orden a que el actor únicamente prestaba





funciones de asesor en temas de transparencia, sin vinculación con la unidad de informática compuesta de un único funcionario.

**13°) Costas de la causa.** Teniendo presente que ninguna de las partes ha resultado totalmente vencida, cada una deberá soportar las costas en que hubiere incurrido.

Por estas razones y visto además lo dispuesto en los artículos 1, 7, 8, 9, 63, 67, 69, 71, 73, 160, 162, 171, 172, 173, 425, 443, 445, 446, 452, 453, 454, 456, 457, 459, 461 y 462 del Código del Trabajo; y 1698 del Código Civil; **SE RESUELVE** que:

**I.- No se hace lugar** a las excepciones opuestas por la demandada de falta de legitimación pasiva e inoponibilidad de las acciones deducidas en autos.

**II.- Se hace lugar** a las acciones de declaración de relación laboral, despido indirecto y cobro de prestaciones, interpuestas en estos antecedentes por don **Eduardo José Guillermo Bustamante Ulloa**, cédula de identidad N° 17.496.524-2; en contra de la **Ilustre Municipalidad de Rauco**, RUT 69.100.400-7, **sólo en cuanto se declara que:**

**1.** El actor trabajó continua e ininterrumpidamente para la demandada, bajo subordinación y dependencia, entre los días 1 de enero de 2017 y 9 de septiembre de 2022.

**2.** La empleadora incurrió en la causal de término de la relación laboral contemplada en el artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que le imponía el contrato de trabajo.

**3.** El actor en virtud del artículo 171 del Código del Trabajo procedió justificadamente con fecha 9 de septiembre de 2022 a la figura del despido indirecto.

**4.** La remuneración mensual del actor ascendía a \$777.778.

**5.** Se condena a la demandada a pagar al actor los siguientes conceptos:

**a) \$777.778**, por indemnización sustitutiva de aviso previo.



**b) \$4.666.668**, por indemnización por años de servicio.

**c) \$2.333.334**, por aumento del 50% de la indemnización por años de servicio.

**d) \$985.185**, por remuneraciones adeudadas de los meses de agosto y septiembre de 2022.

**e) \$1.200.111**, por compensación de feriado legal y proporcional.

**f)** Las cotizaciones de seguridad social por todo el período trabajado. Para estos efectos, una vez ejecutoriada la presente sentencia, oficiase a AFP Modelo, FONASA y AFC Chile, para que procedan a la liquidación y oportuno cobro de todas las cotizaciones adeudadas en el período trabajado por el actor en favor de la demandada, esto es, desde el día 1 de enero de 2017 al 9 de septiembre de 2022; sobre la base de una remuneración mensual imponible de \$777.778 y bajo apercibimiento de lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 4 bis de la Ley 17.322.

**III.- No se hace lugar** a la acción de nulidad del despido, interpuesta en estos antecedentes por don **Eduardo José Guillermo Bustamante Ulloa**, cédula de identidad N° 17.496.524-2; en contra de la **Ilustre Municipalidad de Rauco**, RUT 69.100.400- 7.

**IV.-** Todas las sumas ordenadas pagar, deberán serlo con sus respectivos reajustes e intereses, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

**V.-** Cada parte deberá soportar las costas en que hubiere incurrido.

**VI.-** Ejecutoriada que sea esta sentencia, cúmplase dentro de quinto día, bajo apercibimiento de iniciarse de oficio su ejecución conforme a lo previsto en el artículo 462 del Código del Trabajo.

Anótese, regístrese y notifíquese.

Archívese en su oportunidad.

**RIT O-257-2020**

**RUC 22-4-0428451-0**



Dictada por don **ERICK FABIÁN RÍOS LEIVA**, Juez del Juzgado de Letras del Trabajo de Curicó.



A contar del 11 de septiembre de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>